**RECENSIÓN A LA OBRA:
“RELACIONES CONTRACTUALES DE
COOPERACIÓN EN EL MEDIO AGRARIO Y RURAL”.
AUTORA: ESTHER MUÑIZ ESPADA. EDITORIAL:
ARANZADI, NAVARRA, 2020. 134 PÁGINAS.**

ASENET SOSA ESPINOSA

Universitat Politècnica de València

E-mail: assoos@urb.upv.es

El valor y el compromiso hacia fórmulas de la economía circular y colaborativa, como vía para el alcance de los retos medioambientales, económicos y sociales suscritos por la UE para el desarrollo sostenible y la consecución de sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para el 2030, forman parte de las nuevas estrategias europeas impresas en el marco de la política agraria común, cuyo principal reto ha sido y es superar las dificultades generales pendientes relacionadas con el logro de un tejido económico y social sólido en las zonas rurales.

En este ámbito, la economía colaborativa o las fórmulas de gestión compartida tienen condiciones particulares y requieren de una fisonomía legislativa distinta que para otros sectores.

La obra de la Dra. Esther Muñoz Espada, que aquí se reseña, se enmarca en este centro de interés, realizando un análisis y propuestas de *lege ferenda* para el medio agrario y rural. Su análisis abarca las principales figuras jurídicas que forman parte de la idiosincrasia de lo agrario y rural, desde el punto de vista de la titularidad y gestión de bienes en común mediante los instrumentos jurídicos ya conocidos, pero respecto de los cuales ha de exigirse un mayor desarrollo legislativo, como aquellos que el nuevo fenómeno de la economía colaborativa podría promocionar. Para ello se delimita qué se entiende por este nuevo movimiento que lo hace en rigor diferente de otros precedentes, y que, en todo caso, evidencia las profundas diferencias que se podrían encontrar en otros ámbitos, como en el urbano. Así, su tratamiento es estrictamente propio de lo agrario o de las particularidades de lo rural, que no se reproducen en ningún otro contexto.

Para empezar, se tendría que destacar de entrada la novedad del tema, no sólo en nuestro ámbito jurídico sino también en relación con el europeo, pues respecto a los bienes en común tan sólo conocemos una obra francesa e italiana pero que se abordan más estrictamente desde el punto de vista de la economía circular, que como sabemos no es equivalente a economía colaborativa y se centran en otro tipo de análisis, más ambientalista y menos jurídico o de derecho privado.

Ciertamente, en los últimos años no hay documento político europeo o nacional que relativo a las exigencias del desarrollo económico y social de lo agrario y rural no destaque la importancia de la gestión en común como instrumento para abordar los retos

internacionales y las exigencias para el sector. Tanto es así que ya su competitividad se centra sobre manera en la cooperación. Desde este punto de vista, un programa legislativo se hace urgente para el desenvolvimiento de las instituciones que le afectan, y, de este modo, la obra destaca el estudio, y las respectivas propuestas de *lege ferenda*, en relación con la figura del servicio sustitutorio que pusiera en marcha especialmente el Reglamento 1305/2013, el tema relativo a la normativa específica sobre la agrupación de agricultores para la adquisición y compartición de maquinaria agraria, los posibles desarrollos para el medio agrario y rural del contrato de sociedad, la normativa sobre la concentración de la oferta, los problemas en relación con el asociacionismo, la aplicación de algunas instituciones propias de la economía colaborativa, como el *crowdfunding* para la consecución de los objetivos de dinamización del medio rural, y las posibles iniciativas de la gestión compartida en este medio agrario y rural. Si bien, sean múltiples los supuestos que en este contexto encontramos como aplicación de gestión y puesta de bienes en común.

Todo ello no deja de ser otro reto legislativo más al que se enfrente el contexto normativo agrario, pero a diferencia de otros desafíos al menos respecto de este no ha dejado de destacarse su prioritaria aportación a las rentas de los activos agrarios y a la rentabilidad del sector. Para ello, la obra también incluye datos económicos y estadísticas que junto a la perspectiva netamente jurídica evidencia la trascendencia de las aportaciones en este ámbito, lo que se complementa con otros objetivos paralelos que con ello se cubrirían. Esta estrategia supone, igualmente, una mejora en la posición de los agricultores en la cadena de valor. Por ello, los fondos europeos, en especial los fondos para el desarrollo rural, ayudarán a las regiones rurales a explorar las posibilidades ofrecidas por la economía colaborativa y la bioeconomía, por lo que la Comisión tendrá en cuenta estos aspectos en su visión a largo plazo para las regiones rurales, con especial atención a las regiones ultraperiféricas por su vulnerabilidad.

Son, sobre todo, los documentos europeos los que destacan el valor y el compromiso hacia las fórmulas de economía colaborativa o *sharing economy* como perspectiva de desarrollo de las nuevas actividades y medio para la creación de empleo. Se presenta, así, la economía colaborativa, que se prefiere a la expresión economía participativa, como un medio de acelerar la transición hacia los nuevos objetivos que impondrá la nueva PAC 2021-2027. Aunque esta transformación, como se ha reconocido, se esté desarrollando muy lentamente y ni siquiera de manera uniforme o generalizada.

A estos objetivos iniciales para el sector se han añadido las consecuencias de la pandemia de 2020 que dejarán una profunda huella entre las crisis económicas, lo que agravará la situación, en nuestro contexto, de las industrias agroalimentarias. Luego, a tales necesidades económicas corresponden unos concretos instrumentos del Derecho, por lo que la situación viene a redoblar la necesidad de medidas jurídicas que ayuden a restaurar o potenciar el sistema, por lo que aquí incumbe especialmente agroalimentario, al menos a mantenerlo como sea, y los mecanismos que pueden coadyuvar en la actualidad a esta situación son los propios de la economía colaborativa y de la gestión en común. Ello se ha tratado de hacer en otros países más sensibles con el contexto agrario y rural, y se han hecho bien consciente de la necesidad de una estrategia nacional alimentaria coherente para salvar, en la actualidad, la soberanía alimentaria en toda la extensión de su término. Por lo que cada actuación jurídica cuenta en todo el entramado que guía hacia el mismo objetivo, que debería tener un planteamiento de alcance europeo y no solamente

nacional. De modo que son numerosos los frentes económicos y sociales que se cubrirían, como se reconoce en este trabajo, con una normativa que desarrollara legislativamente todo lo que envuelve el fenómeno colaborativo o de bienes en común.

La variedad de problemas estructurales en el medio agrario y rural ponen de manifiesto la insuficiencia de instrumentos y de mecanismos articulados en las distintas normas actualmente reguladoras de la materia. Los desequilibrios se arrastran desde hace muchos años, los desafíos de los tiempos de la *sharing economy* podrían ser el momento para articular todo un sistema de gestión en común o uso en común de los medios para el desenvolvimiento de las actividades agrarias y sus actividades complementarias, para dar mayor vitalidad al sector agrario en toda su extensión y dinamismo a las zonas rurales, centrándose, además, en lo que es la herramienta principal para su desenvolvimiento, cuales son las plataformas digitales a través de las cuales se materializan los intereses de sus intervinientes. Nunca como ahora, por la conjunción de numerosas circunstancias, sociales, políticas y, sobre todo, económicas, el tema podría alcanzar mayor interés.

Por todo ello, nos encontramos con una obra de ineludible lectura, que resulta enriquecida con una amplia y selecta bibliografía extranjera, en coherencia con la importancia que asume el trabajo en relación con el valor del Derecho comparado.